

No. 35452

**Argentina
and
El Salvador**

Agreement between the Argentine Republic and the Republic of El Salvador for the reciprocal promotion and protection of investments. San Salvador, 9 May 1996

Entry into force: *8 January 1999 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 13*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 22 January 1999*

**Argentine
et
El Salvador**

Accord entre la République argentine et la République d'El Salvador relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements. San Salvador, 9 mai 1996

Eutrée en vigueur : *8 janvier 1999 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 13*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 22 janvier 1999*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**ACUERDO ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA
DE INVERSIONES**

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de El Salvador, denominados en adelante "las Partes Contratantes";

Con el deseo de intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos Estados;

Con la intención de crear y mantener condiciones favorables a las inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante; y

Reconociendo la necesidad de promover y proteger tales inversiones con miras a favorecer la prosperidad económica de ambos Estados,

Han acordado lo siguiente:

**ARTÍCULO 1
Definiciones**

Para los efectos del presente Acuerdo:

1. El término "inversor" designa, para cada una de las Partes Contratantes, a los siguientes sujetos que hayan efectuado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo:
 - a. las personas físicas que sean nacionales de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación;

- b. las personas jurídicas, incluyendo sociedades, corporaciones, asociaciones comerciales o cualquier otra entidad constituida o debidamente organizada de otra manera según las leyes y reglamentaciones de esa Parte Contratante, y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante;
 - c. las personas jurídicas establecidas de conformidad con la legislación de cualquier país, que esten efectivamente controladas, directa o indirectamente, por personas físicas de esa Parte Contratante o por personas jurídicas que tengan su sede y actividades económicas, reales y principales en el territorio de dicha Parte Contratante.
2. El término "inversión", efectuado de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, designa todo tipo de derechos o activos invertidos por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:
- a. bienes muebles e inmuebles, así como todos los demás derechos reales, tales como servidumbres, hipotecas, usufructos y prendas;
 - b. acciones, cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación económica en sociedades;
 - c. títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor económico; los préstamos estarán incluidos solamente cuando estén directamente vinculados a una inversión específica;
 - d. derechos de propiedad intelectual, tales como derechos de autor y derechos de propiedad industrial, comprendiendo entre estos últimos, patentes, procesos técnicos, marcas de fábrica o marcas comerciales, nombres comerciales, razón social, diseños industriales, conocimientos técnicos, y derecho de llave;
 - e. concesiones conferidas por la ley o por contrato, incluyendo las concesiones para la prospección, exploración, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.
3. El término "ganancias" designa todas las sumas producidas por una inversión, tales como utilidades, dividendos, intereses, regalías y otros ingresos corrientes.

4. El término "territorio", designa el territorio nacional de cada Parte Contratante, incluyendo aquellas zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial del territorio nacional, sobre el cual la Parte Contratante concernida pueda, de conformidad con el derecho interno y el derecho internacional, ejercer derechos soberanos o jurisdicción.

ARTÍCULO 2

Ámbito de Aplicación

1. El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de entrada en vigor, pero las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicarán a ninguna controversia, reclamo o diferendo que haya surgido con anterioridad a su entrada en vigor.
2. Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, si tales personas a la fecha de la inversión han estado domiciliadas desde hace más de dos años en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en su territorio desde el exterior.

ARTÍCULO 3

Promoción y Protección de las Inversiones

1. Cada Parte Contratante, promoverá en su territorio las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y admitirá dichas inversiones, conforme a sus respectivas leyes y reglamentaciones.
2. Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, les otorgará en su territorio plena protección legal y no obstaculizará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

Tratamiento de las Inversiones

1. Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversores, o a inversores de un tercer país, si este último tratamiento fuere más favorable.
2. Si una de las Partes Contratantes hubiere otorgado un tratamiento especial a las inversiones provenientes de un tercer país en virtud de convenios que establezcan disposiciones para evitar la doble tributación o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, uniones económicas o monetarias u otras instituciones similares, dicha Parte Contratante no estará obligada a otorgar el tratamiento en cuestión a los inversores o a las inversiones de la otra Parte Contratante.
3. En el caso particular de los acuerdos bilaterales que contemplan financiación concesional suscritos por la República Argentina con Italia el 10 de diciembre de 1987 y con España del 3 de junio de 1988, las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no serán interpretadas en el sentido de extender a los inversores de la otra Parte dichos beneficios.

ARTÍCULO 5 Situación Migratoria

1. Con sujeción a su legislación relativa a la entrada y permanencia de extranjeros, cada Parte Contratante permitirá la entrada y permanencia en su territorio a los inversores de la otra Parte Contratante y a las personas por ellos contratadas, con el propósito de establecer, desarrollar, administrar o asesorar el funcionamiento de la inversión, en la cual tales inversores hayan comprometido o estén a punto de comprometer capital u otros recursos.
2. Cada Parte Contratante, permitirá conforme a sus leyes y reglamentaciones respectivas, que los inversores de la otra Parte Contratante empleen el personal administrativo superior que deseen, sea cual fuere la nacionalidad de dicho personal.

1. Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversores, o a inversores de un tercer país, si este último tratamiento fuere más favorable.
2. Si una de las Partes Contratantes hubiere otorgado un tratamiento especial a las inversiones provenientes de un tercer país en virtud de convenios que establezcan disposiciones para evitar la doble tributación o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, uniones económicas o monetarias u otras instituciones similares, dicha Parte Contratante no estará obligada a otorgar el tratamiento en cuestión a los inversores o a las inversiones de la otra Parte Contratante.
3. En el caso particular de los acuerdos bilaterales que contemplan financiación concesional suscritos por la República Argentina con Italia el 10 de diciembre de 1987 y con España del 3 de junio de 1988, las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no serán interpretadas en el sentido de extender a los inversores de la otra Parte dichos beneficios.

ARTÍCULO 5 **Situación Migratoria**

1. Con sujeción a su legislación relativa a la entrada y permanencia de extranjeros, cada Parte Contratante permitirá la entrada y permanencia en su territorio a los inversores de la otra Parte Contratante y a las personas por ellos contratadas, con el propósito de establecer, desarrollar, administrar o asesorar el funcionamiento de la inversión, en la cual tales inversores hayan comprometido o estén a punto de comprometer capital u otros recursos.
2. Cada Parte Contratante, permitirá conforme a sus leyes y reglamentaciones respectivas, que los inversores de la otra Parte Contratante empleen el personal administrativo superior que deseen, sea cual fuere la nacionalidad de dicho personal.

Transferencias

1. Cada una de las Partes Contratantes permitirá que todas las transferencias relacionadas con la inversión de un inversor de una Parte Contratante en territorio de la otra Parte Contratante, se hagan libremente y sin demora.

Dichas transferencias comprenden en particular, aunque no exclusivamente:

- a. el capital y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y el desarrollo de las inversiones;
 - b. los beneficios, utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;
 - c. los fondos para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el artículo 1, párrafo 2 literal c;
 - d. las regalías y honorarios;
 - e. el producto de una venta o liquidación total o parcial de una inversión;
 - f. las indemnizaciones o compensaciones previstas en el artículo 7;
 - g. los pagos que provengan de la aplicación de las disposiciones relativas a la solución de controversias contenidas en este Acuerdo;
 - h. los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que hayan obtenido una autorización para trabajar en relación a una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante.
2. Cada una de las Partes Contratantes permitirá que las transferencias se realicen en divisa de libre convertibilidad al tipo de cambio normal vigente y aplicable en la fecha de la transferencia.
 3. Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 1 y 2, cada Parte Contratante podrá proteger los derechos de acreedores o asegurar el cumplimiento de decisiones firmes emitidas en procesos judiciales o arbitrales, a través de una aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes y reglamentaciones, incluyendo aunque no exclusivamente:
 - a. quiebra o insolvencia;

- b. infracciones penales o administrativas;
- c. garantía del cumplimiento de los fallos en un procedimiento contencioso;
- d. incumplimiento de obligaciones tributarias;
- e. incumplimiento de obligaciones laborales.

4- No obstante lo dispuesto en este Artículo, las Partes Contratantes podrán establecer de manera general, equitativa, no discriminatoria y transparente, medidas de salvaguardia de balanza de pagos de conformidad con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

ARTÍCULO 7 **Expropiación, Compensación o Indemnización**

1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará directa o indirectamente medidas de nacionalización o expropiación, ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones que se encuentran en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
 - a. que las medidas sean tomadas por razones de utilidad pública o interés social y bajo el debido proceso legal;
 - b. que las medidas no sean discriminatorias; y
 - c. que las medidas estén acompañadas de disposiciones que prevean el pago de una compensación o indemnización pronta, adecuada y efectiva.
2. El monto de dicha compensación o indemnización corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes que la expropiación inminente se hiciera pública, comprenderá intereses desde la fecha de la expropiación a una tasa comercial normal, será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible.
3. La legalidad de la expropiación, nacionalización o medida equivalente y el monto de la compensación o indemnización, serán revisables en el procedimiento judicial correspondiente.

sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante debido a guerra u otro conflicto armado; estado de emergencia nacional; disturbios civiles y otros acontecimientos similares, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado.

ARTÍCULO 8 **Subrogación**

1. Si una Parte Contratante, una agencia designada o un organismo autorizado por ésta realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro financiero contra riesgos no comerciales, que hubiere contratado en relación a una inversión, la otra Parte Contratante, reconocerá la validez de la subrogación en favor de aquella Parte Contratante, su agencia designada u organismo autorizado respecto de cualquier derecho o título del inversor. La Parte Contratante, la agencia designada u organismo autorizado por ésta estará autorizada dentro de los límites de la subrogación a ejercer los mismos derechos que el inversor hubiera estado autorizado a ejercer.
2. Cuando una Parte Contratante haya pagado a su inversor y en tal virtud haya asumido sus derechos y prestaciones, dicho inversor no podrá reclamar tales derechos y prestaciones a la otra Parte Contratante, salvo autorización expresa de la primera Parte Contratante.

ARTICULO 9 **Aplicación de Otras Normas**

Sí las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones de derecho internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes en adición al presente Acuerdo o si un acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante contienen normas, ya sean generales o específicas que otorguen a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el que se establece en el presente Acuerdo, aquellas normas prevalecerán sobre el presente Acuerdo en la medida que sean más favorables.

ARTÍCULO 10
Solución de Controversias entre un Inversor y la Parte Contratante receptora de la Inversión

1. Toda Controversia relativa a las disposiciones del presente Acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será, en la medida de lo posible, solucionada mediante consultas o negociaciones amistosas, sin perjuicio de las gestiones que puedan realizarse por la vía diplomática.

2. Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las Partes contratantes, podrá ser sometida, a pedido del inversor:
 - o bien a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión,
 - o bien al Arbitraje Internacional en las condiciones descritas en el numeral tres de este Artículo.

Una vez que un inversor haya sometido la controversia a la jurisdicción de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

3. En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser llevada, a elección del inversor:
 - al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965.
 - a un tribunal de arbitraje "ad-hoc" establecido de acuerdo a las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).

4. El organo arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Acuerdo, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, incluidas las normas relativas a conflictos de leyes, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión así como a los principios del derecho internacional en la materia

5. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para el inversor y la Parte Contratante en la controversia, la que las ejecutará de conformidad con su legislación.
6. Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, a través de los canales diplomáticos, argumentos concernientes al arbitraje o a un proceso judicial ya en marcha, hasta que los procedimientos correspondientes hubieren sido concluidos, salvo que las Partes Contratantes en la controversia no hubieren cumplido el laudo del tribunal arbitral o la sentencia del tribunal ordinario, según los términos de cumplimiento establecidos en el laudo o en la sentencia.

ARTÍCULO 11

Solución de Controversias entre las Partes Contratantes

1. Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán, en la medida de lo posible, solucionadas por medio de la vía diplomática.
2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiere ser dirimida de esa manera en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de la notificación de la existencia de la controversia, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes a un Tribunal Arbitral.
3. El Tribunal Arbitral estará compuesto para cada caso particular de tres miembros y será conformado de la siguiente manera: dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará un árbitro. Estos dos árbitros elegirán, dentro del plazo de treinta días contados desde la designación del último de ellos, un tercer miembro, quien deberá ser nacional de un tercer Estado y presidirá el Tribunal.
4. Si dentro de los plazos previstos en el párrafo 3 de este Artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el Presidente fuere nacional de una de las Partes Contratantes o cuando, por cualquier razón, se hallare impedido de desempeñar dicha función, se invitará al Vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, o si se hallare también impedido de desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, será invitado a efectuar los nombramientos necesarios.

5. El Presidente del Tribunal deberá ser nacional de un Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomáticas.

6. El Tribunal Arbitral decidirá sobre la base de las disposiciones del presente Acuerdo, los principios de derecho reconocidos por las Partes Contratantes, así como los principios generales de Derecho Internacional en la materia. Tomará su decisión por mayoría de votos y determinará sus propias reglas procesales. Tal decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su miembro del tribunal y de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados en principio por partes iguales por las Partes Contratantes, salvo que éstas acuerden otra modalidad. No obstante, el Tribunal Arbitral podrá determinar en su decisión que una mayor proporción de los gastos sean sufragados por una de las dos Partes Contratantes, y este laudo será obligatorio para ambas Partes Contratantes.

ARTÍCULO 12 **Disposición Transitoria**

Las Partes Contratantes se comprometen a comunicarse por la vía diplomática en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la firma del presente Acuerdo, aquellos sectores en los que existan reservas por razones de nacionalidad de acuerdo a sus respectivas Legislaciones Internas.

ARTICULO 13 **Disposiciones Finales**

1. Este Acuerdo entrará en vigencia treinta días después del intercambio de sus respectivos instrumentos de ratificación. Permanecerá en vigencia por un período de diez años. Transcurrido dicho período, este Acuerdo se prolongará por un tiempo indefinido, a menos que una de las Partes Contratantes le ponga término de conformidad a lo dispuesto por el párrafo 2.

2. Transcurridos diez años, una de las Partes Contratantes puede poner término a este Acuerdo en cualquier momento, con un preaviso de seis meses comunicado por la vía diplomática.
3. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Acuerdo continuarán aplicándose por un período de diez años a las inversiones efectuadas antes del preaviso de terminación del Acuerdo.

Hecho en San Salvador, a los nueve días del mes de mayo de 1996 en duplicado en el idioma castellano.



POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA



POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF EL SALVADOR FOR THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of El Salvador, hereinafter referred to as "the Contracting Parties";

Desiring to intensify economic cooperation for the mutual benefit of both States;

Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and

Recognizing the need to promote and protect such investments with a view to furthering the economic prosperity of both States,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investor" means, for each of the Contracting Parties, the following entities which have made investments in the territory of the other Contracting Party in accordance with this Agreement:

(a) Individuals who are nationals of one of the Contracting Parties, in accordance with its legislation;

(b) Legal entities, including companies, corporations, commercial associations or any other body which is constituted or duly organized in another manner in accordance with the laws and regulations of that Contracting Party, and which has its headquarters in the territory of that Contracting Party;

(c) Legal entities established in accordance with the legislation of either country which are effectively controlled, directly or indirectly, by individuals of that Contracting Party or by legal entities which have their headquarters and their real and principal economic activities in the territory of that Contracting Party.

2. The term "investment", carried out in conformity with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made, means all types of rights or assets invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the latter's legislation. It includes in particular, although not exclusively:

(a) Movable and immovable property and all other rights in rem, such as obligations, mortgages, interest and pledges;

(b) Shares, stocks and any other type of economic participation in companies;

(c) Claims to money and claims to performance having an economic value; loans shall be included only when they are directly linked to a specific investment;

(d) Intellectual property rights, such as copyright and industrial property rights, the latter to include patents, technical processes, manufacturing and trade marks, trade names, company names, industrial designs, know-how and goodwill;

(e) Concessions conferred by law or under contract, including concessions to prospect for, explore, cultivate, extract or exploit natural resources.

3. The term "returns" means all amounts yielded by an investment, such as profits, dividends, interest, royalties and other current income.

4. The term "territory" means the national territory of each Contracting Party, including maritime zones which are adjacent to the outer limit of the territorial sea of the national territory, over which the Contracting Party concerned may, in accordance with domestic and international law, exercise sovereign rights or jurisdiction.

Article 2. Sphere of Application

1. This Agreement shall apply to all investments made before or after the date of its entry into force, but the provisions of this Agreement shall not apply to any dispute, claim or difference which arose before its entry into force.

2. The provisions of this Agreement shall not apply to investments made by individuals who are nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party if such persons, at the time of making the investment, had been domiciled for more than two years in that Contracting Party, unless it is proved that the investment was admitted into the territory of that Contracting Party from abroad.

Article 3. Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall promote in its territory investments by investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. Each Contracting Party shall ensure at all times a fair and equitable treatment of investments by investors of the other Contracting Party, shall grant them full legal protection in its territory, and shall not impair their management, maintenance, use, enjoyment or disposal through unreasonable or discriminatory measures.

Article 4. Treatment of Investments

1. Each Contracting Party shall accord to investments which are made in its territory by investors of the other Contracting Party treatment which is no less favourable than that which it accords to investments by its own investors, or to investors of a third country, if that treatment is more favourable.

2. If one of the Contracting Parties has accorded special treatment to investments from a third country by virtue of agreements which establish provisions for the avoidance of double taxation or other agreements on tax questions, free trade areas, customs unions, common markets, economic or monetary unions or other similar institutions, that Contracting

Party shall not be obliged to grant the treatment in question to investors or investments of the other Contracting Party.

3. In the particular case of the bilateral agreements providing for concessional financing which were concluded by the Argentine Republic with Italy on 10 December 1987 and with Spain on 3 June 1988, the provisions of paragraph 1 of this article shall not be interpreted in the sense of extending those benefits to investors of the other Party.

Article 5. Migration Situation

1. Subject to its legislation relating to the entry and stay of aliens, each Contracting Party shall permit the entry and stay in its territory of investors of the other Contracting Party and persons employed by them for the purpose of establishing, developing, administering or advising on the operation of investments to which such investors have committed or are about to commit capital and other resources.

2. Each Contracting Party, subject to its laws and regulations, shall permit investors of the other Contracting Party to employ senior administrative personnel of their choice, regardless of nationality.

Article 6. Transfers

1. Each of the Contracting Parties shall allow all transfers related to investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party to be carried out freely and without delay.

Such transfers shall include, in particular, but not exclusively:

(a) Capital, and additional amounts necessary for the maintenance and development of investments;

(b) Profits, earnings, interest, dividends and other current income;

(c) Funds for the repayment of loans as defined in article 1, paragraph 2 (c);

(d) Royalties and fees;

(e) Proceeds from the total or partial sale or liquidation of an investment;

(f) Compensation or indemnification referred to in article 7;

(g) Payments arising from the application of the provisions of this Agreement relating to the settlement of disputes;

(h) Income of nationals of one Contracting Party who have received permission to work in relation to an investment in the territory of the other Contracting Party.

2. Each of the Contracting Parties shall allow transfers to be made in freely convertible currency at the normal rate of exchange in force and applicable on the date of the transfer.

3. Without prejudice to the provisions of paragraphs 1 and 2, each Contracting Party may protect the rights of creditors or ensure the satisfaction of final judgements in legal or arbitral proceedings through an equitable, non-discriminatory and good faith application of its laws and regulations, including, but not limited to:

(a) Bankruptcy or insolvency;

- (b) Criminal or administrative offences;
- (c) Guarantee of the fulfilment of judgements in litigation;
- (d) Non-fulfilment of tax obligations;
- (e) Non-fulfilment of employment obligations.

4. Notwithstanding the provisions of this article, the Contracting Parties may institute measures to protect the balance of payments, in a general, equitable, non-discriminatory and transparent manner, in accordance with the rules of the World Trade Organization.

Article 7. Expropriation, Compensation or Indemnification

1. Neither Contracting Party shall take direct or indirect measures of nationalization or expropriation, or any other measure which has the same effect, against investments which are in its territory and which belong to investors of the other Contracting Party, unless the following conditions are met:

- (a) The measures are taken for reasons of public purpose or social welfare and under due process of law;
- (b) The measures are non-discriminatory; and
- (c) The measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation or indemnification.

2. The amount of such compensation or indemnification shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, shall include interest at a normal commercial rate from the date of expropriation, shall be paid without delay, and shall be effectively realizable and freely transferable.

3. The legality of any such expropriation, nationalization or comparable measure and the amount of compensation or indemnification shall be subject to review by due process of law.

4. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, or civil disturbances and other similar events shall be accorded by the latter Contracting Party treatment which is no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of a third State as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement.

Article 8. Subrogation

1. If a Contracting Party, a designated agency or a body authorized by that agency makes a payment to an investor under a guarantee or a contract of insurance against non-commercial risks which it has entered into in respect of an investment, the other Contracting Party shall recognize the validity of the subrogation in favour of that Contracting Party, its designated agency or authorized body with regard to any investment right or title. The Contracting Party, the designated agency or the body authorized by that agency shall be au-

thorized, within the limits of the subrogation, to exercise the same rights as the investor would have been authorized to exercise.

2. Where a Contracting Party has paid an investor and by virtue thereof has assumed the latter's rights and claims, that investor may not assert such rights and claims against the other Contracting Party, unless given express authorization by the first Contracting Party.

Article 9. Application of Other Rules

If the provisions of the legislation of either Contracting Party, the obligations under international law existing at present or established hereinafter between the Contracting Parties further to the present Agreement, or an agreement between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party, contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such rules shall, to the extent that they are more favourable, take precedence over the present Agreement.

Article 10. Settlement of Disputes between an Investor and the Contracting Party Receiving the Investment

1. Any dispute relating to the provisions of this Agreement between an investor of a Contracting Party and the other Contracting Party shall, as far as possible, be settled through amicable consultations or negotiations, without prejudice to any action which may be taken through the diplomatic channel.

2. If the dispute cannot be settled within six months of the date on which it was raised by one or other of the Contracting Parties, it may be submitted, at the request of the investor:

— To the competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment was made, or

— To international arbitration under the conditions described in paragraph 3 of this article.

Once an investor has submitted a dispute to the jurisdiction of the Contracting Party involved or to international arbitration, the choice of one or other of these procedures shall be final.

3. In the case of international arbitration, the dispute shall be submitted, at the investor's choice, either:

— To the International Centre for the Settlement of Investment Disputes established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for signature in Washington on 18 March 1965, or

— To an ad hoc arbitral tribunal established in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law.

4. The arbitral body shall make its decision on the basis of the provisions of this Agreement, the laws of the Contracting Party which is a party to the dispute, including the rules

on conflicts of laws, the terms of any specific agreements concluded in relation to investment, and the relevant principles of international law.

5. Arbitral decisions shall be final and binding for the investor and for the Contracting Party in the dispute, which shall implement them in accordance with its legislation.

6. The Contracting Parties shall refrain from taking up complaints through the diplomatic channel with regard to arbitration or a judicial process which is already under way until the proceedings have been concluded, unless the Contracting Parties to the dispute have not complied with the decision of the arbitral tribunal or the ruling of the ordinary court, in accordance with the terms of implementation established in the ruling or the decision.

Article 11. Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled through the diplomatic channel.

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot be settled in this manner within a period of six months from the date of notification of the existence of the dispute, it shall be submitted, at the request of either Contracting Party, to an arbitral tribunal.

3. The arbitral tribunal shall consist for each individual case of three members and shall be constituted in the following way: within a period of two months from the date of notification of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one arbitrator. Within a period of 30 days from the date of the appointment of the second arbitrator, these two arbitrators shall select a third member, who must be a national of a third State and shall chair the tribunal.

4. If, within the time-limits specified in paragraph 3 of this article, the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of one of the Contracting Parties or is otherwise precluded from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of one of the Contracting Parties or if he too is precluded from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

5. The chairman of the tribunal must be a national of a State with which both Contracting Parties maintain diplomatic relations.

6. The arbitral tribunal shall make its decision on the basis of the provisions of this Agreement, the principles of law recognized by the Contracting Parties, and the general principles of international law in the matter. It shall reach its decision by a majority of votes and shall determine its own rules of procedure. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the costs of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the costs of the Chairman and the remaining costs shall in principle be borne in equal parts by the Contracting Parties, unless they agree on another method. However, the arbitral tribunal may direct in its decision that

a higher proportion of the costs should be borne by one of the two Contracting Parties, and such award shall be binding on both Contracting Parties.

Article 12. Transitional Provision

The Contracting Parties undertake to notify each other through the diplomatic channel within a period of no more than 60 days from the signing of this Agreement of the sectors in which reservations exist for reasons of nationality in accordance with their respective domestic legislation.

Article 13. Final Provisions

1. This Agreement shall enter into force 30 days after the date of the exchange of instruments of ratification. It shall remain in force for a period of 10 years and thereafter shall be extended for an unlimited period unless either Contracting Party terminates it in accordance with the provisions of paragraph 2.

2. After 10 years, either Contracting Party may terminate this Agreement at any time, by giving six months' notice through the diplomatic channel.

3. In the event of denunciation, the provisions of this Agreement shall continue to apply for a period of 10 years to investments made prior to the date of notification of the termination of the agreement.

Done at San Salvador, on 9 May 1996, in two original copies in the Spanish language.

For the Government of the Argentine Republic:

ANDRÉS CISNEROS

For the Government of the Republic of El Salvador:

RAMÓN GONZÁLEZ GINER

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE
D'EL SALVADOR RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION
RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République d'El Salvador, ci-après dénommés les "Parties contractantes",

Désireux de resserrer leur coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux États,

Entendant créer et entretenir des conditions propices aux investissements des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, et

Reconnaissant la nécessité de promouvoir et de protéger lesdits investissements dans le but de favoriser la prospérité économique des deux États,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. L'expression "investisseur" désigne, dans le cas de chacune des Parties contractantes, les personnes ci-après ayant effectué des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément au présent Accord :

a) Les personnes physiques qui sont ressortissantes de l'une des Parties contractantes conformément à sa législation;

b) Les personnes morales, y compris sociétés, corporations, associations commerciales ou toutes autres entités constituées ou dûment organisées conformément à la législation et à la réglementation de ladite Partie contractante et ayant leur siège sur le territoire de celle-ci;

c) Les personnes morales constituées conformément à la législation de n'importe quel pays qui sont effectivement contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques de ladite Partie contractante ou par des personnes morales ayant leur siège et leurs activités économiques réelles et principales sur le territoire de ladite Partie.

2. L'expression "investissement" effectué conformément à la législation et la réglementation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il a été réalisé désigne tous droits ou actifs investis par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément à la législation de cette dernière et englobe notamment mais pas exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels comme servitudes, hypothèques, usufruits et nantissements;

b) Les actions, parts sociales et tout autre type de participation économique dans des sociétés;

c) Les créances et droits à prestations ayant une valeur économique, ladite expression n'englobant cependant les prêts que lorsqu'ils sont directement liés à un investissement spécifique;

d) Les droits de propriété intellectuelle, comme droits d'auteur et droits de propriété industrielle, y compris brevets, procédés techniques, marques de fabrique ou de commerce, appellations commerciales, raisons sociales, dessins industriels, connaissances techniques et pas-de-porte;

e) Les concessions accordées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d'exploration, de mise en valeur, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.

3. L'expression "produit" désigne tous les montants produits par un investissement comme bénéfices, dividendes, intérêts, redevances et autres recettes courantes.

4. L'expression "territoire" désigne le territoire national de chacune des Parties contractantes, y compris les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale sur lesquelles la Partie contractante dont il s'agit peut exercer des droits de souveraineté ou de juridiction conformément au droit interne et au droit international.

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Accord s'applique à tous les investissements réalisés avant ou après la date de son entrée en vigueur mais pas aux différends, réclamations ou litiges ayant surgi avant son entrée en vigueur.

2. Les dispositions du présent Accord ne sont pas applicables aux investissements réalisés par les personnes morales ressortissantes d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante si les intéressés, à la date de l'investissement, étaient domiciliés sur le territoire de cette dernière depuis plus de deux ans, à moins qu'il ne soit établi que l'investissement a été effectué sur son territoire depuis l'étranger.

Article 3. Promotion et protection des investissements

1. Chacune des Parties contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet lesdits investissements conformément à sa législation et à sa réglementation.

2. Chacune des Parties contractantes accorde à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, leur accorde sur son territoire une pleine protection juridique et n'entrave pas leur gestion, leur service, leur affectation, leur jouissance ou leur aliénation au moyen de mesures injustifiées ou discriminatoires.

Article 4. Traitement des investissements

1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable

que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers si ce dernier traitement est plus favorable.

2. Si l'une des Parties contractantes a accordé un traitement spécial aux investissements provenant d'un pays tiers en vertu d'accords tendant à éviter la double imposition, de conventions fiscales ou d'autres accords concernant des zones de libre-échange, des unions douanières, des marchés communs, des unions économiques ou monétaires ou d'autres institutions semblables, elle n'est pas tenue d'accorder le traitement en question aux investisseurs ou aux investissements de l'autre Partie contractante.

3. Dans le cas particulier des accords bilatéraux de financement concessionnel conclus par la République argentine avec l'Italie le 10 décembre 1987 et avec l'Espagne le 3 juin 1988, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas interprétées comme étendant le bénéfice desdits accords aux investisseurs de l'autre Partie.

Article 5. Séjour des étrangers

1. Sous réserve de sa législation concernant l'entrée et le séjour des étrangers, chacune des Parties contractantes autorise l'entrée et le séjour sur son territoire des investisseurs de l'autre Partie contractante et des personnes recrutées par elle pour établir, développer et administrer l'investissement ou donner des conseils sur sa gestion si lesdits investisseurs ont engagé ou sont sur le point d'engager des capitaux ou autres ressources dans l'investissement.

2. Chacune des Parties contractantes, conformément à sa législation et à sa réglementation, autorise les investisseurs de l'autre Partie contractante à employer les cadres supérieurs qu'ils jugent appropriés, quelle que soit leur nationalité.

Article 6. Transferts

1. Chacune des Parties contractantes autorise le libre transfert, sans retard, de tous les fonds liés à l'investissement sur son territoire d'un investisseur de l'autre Partie contractante.

Lesdits fonds comprennent notamment mais pas exclusivement :

- a) Le capital originel et tous les montants additionnels requis pour maintenir ou développer l'investissement;
- b) Les bénéfices, intérêts, dividendes et autres recettes courantes;
- c) Les fonds destinés au remboursement des prêts, tels que ceux-ci sont définis à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article premier;
- d) Les redevances et honoraires;
- e) Le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement;
- f) Les indemnisations ou compensations prévues à l'article 7;
- g) Les paiements provenant de l'application des dispositions du présent Accord relatives au règlement des différends;

h) Les revenus des ressortissants de l'une des Parties contractantes ayant obtenu l'autorisation de travailler dans le contexte d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Chacune des Parties autorise ce transfert en monnaie librement convertible, au taux de change normal en vigueur et applicable à la date du transfert.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, chacune des Parties contractantes peut protéger les droits des créanciers ou assurer l'application de décisions définitives issues de procédures judiciaires ou arbitrales grâce à une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation et de sa réglementation, notamment mais pas exclusivement dans les cas suivants :

- a) Faillite ou insolvabilité;
- b) Infractions pénales ou administratives;
- c) Garantie de l'application d'un jugement rendu dans une procédure contentieuse;
- d) Inobservation des obligations fiscales;
- e) Inobservation des obligations découlant de la législation du travail.

4. Nonobstant les dispositions du présent article, les Parties peuvent adopter de manière générale, équitable, non discriminatoire et transparente des mesures de sauvegarde de la balance des paiements conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Article 7. Expropriation, compensation ou indemnisation

1. Aucune des Parties contractantes ne prend directement ou indirectement de mesures de nationalisation ou d'expropriation ni de mesures ayant le même effet à l'égard d'investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante, sauf si lesdites mesures :

- a) Sont adoptées pour des raisons d'utilité publique ou d'intérêt social et conformément à une procédure régulière;
- b) Ne sont pas discriminatoires; et
- c) Sont accompagnées de dispositions prévoyant le paiement d'une compensation ou indemnisation rapide, adéquate et effective.

2. Le montant de ladite compensation ou indemnisation correspond à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation ou avant que l'expropriation imminente ne soit rendue publique, porte intérêt à compter de la date de l'expropriation au taux commercial normal, est payé sans tarder et est effectivement réalisable et librement transférable.

3. La légalité de l'expropriation, de la nationalisation ou de la mesure équivalente et le montant de la compensation ou de l'indemnisation peuvent faire l'objet des recours judiciaires correspondants.

4. Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante du fait d'une guerre ou d'un conflit armé, d'un état d'urgence nationale, d'une révolte, d'une insurrection, d'une émeute ou de tout au-

tre événement semblable bénéficient pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation, du dédommagement ou d'un autre règlement d'un traitement non moins favorable que celui accordé par cette autre Partie contractante à ses propres ressortissants ou à ceux de tout État tiers.

Article 8. Subrogation

1. Si une Partie contractante ou une agence ou organisme désigné par elle fait un paiement à un investisseur au titre d'une garantie ou d'une assurance financière contre des risques non commerciaux en rapport avec un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation de l'autre Partie contractante ou de l'agence ou organisme autorisé par elle dans les créances ou droits de l'investisseur. Ladite Partie contractante ou l'agence ou organisme autorisé par elle est habilitée, dans les limites de la subrogation, à faire valoir les mêmes droits que ceux qu'aurait pu faire valoir l'investisseur lui-même.

2. Si une Partie contractante a effectué un paiement à son investisseur et a assumé à ce titre les droits et créances de ce dernier, ledit investisseur ne peut faire valoir lesdits droits et créances devant l'autre Partie contractante qu'avec l'autorisation expresse de la première Partie contractante.

Article 9. Application d'autres règles.

Si les dispositions de la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou les obligations existant en vertu du droit international ou convenues par la suite entre les Parties contractantes indépendamment du présent Accord ou un accord entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante prévoient l'application de règles de caractère général ou spécifique accordant aux investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, lesdites règles prévalent sur celles du présent Accord dans la mesure où elles sont plus favorables.

Article 10. Règlement des différends entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante

1. Tout différend relatif aux dispositions du présent Accord entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante est, dans la mesure du possible, réglé par voie de consultation ou de négociation à l'amiable, sans préjudice des démarches pouvant être effectuées par la voie diplomatique.

2. Si le différend ne peut pas être réglé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, il peut, à la demande de l'investisseur, être soumis :

Soit aux tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé,

Soit à l'arbitrage international dans les conditions décrites au paragraphe 3 du présent article.

Une fois que l'investisseur a soumis le différend à la juridiction de la Partie contractante concernée ou à l'arbitrage international, le choix de l'une ou l'autre de ces procédures est définitif.

3. S'il a recours à l'arbitrage international, l'investisseur peut porter le différend, à son gré :

Devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965,

Devant un tribunal arbitral ad hoc établi conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

4. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord, du droit de la Partie contractante partie au différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions des accords particuliers éventuellement conclus en rapport avec l'investissement ainsi que des principes du droit international applicables en la matière.

5. La sentence arbitrale est définitive et lie l'investisseur et la Partie contractante concernée, laquelle l'exécute conformément à sa législation.

6. Les Parties contractantes s'abstiennent d'invoquer par la voie diplomatique des arguments liés à un arbitrage ou à une procédure judiciaire en cours tant que celle-ci n'est pas achevée, sauf si les Parties contractantes en litige n'ont pas appliqué la sentence du tribunal arbitral ou le jugement du tribunal ordinaire conformément aux dispositions stipulées à cette fin dans la sentence ou le jugement.

Article 11. Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Les différends pouvant surgir entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sont, dans la mesure du possible, réglés par la voie diplomatique.

2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut pas être ainsi réglé dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'existence du différend, celui-ci est soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.

3. Le tribunal arbitral est composé dans chaque cas particulier de trois arbitres et est constitué comme suit : dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'arbitrage, chacune des Parties contractantes désigne un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés, dans un délai de trente jours à compter de la date de désignation du dernier d'entre eux, choisissent un tiers arbitre, qui doit être ressortissant d'un État tiers et préside le tribunal.

4. Si les désignations nécessaires ne sont pas effectuées dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, faute d'autres arrangements, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations requises. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties contractantes ou

s'il est empêché pour quelque raison que ce soit de s'acquitter de cette tâche, le Vice-Président est invité à procéder aux nominations requises. Si le Vice-Président est lui-même ressortissant de l'une des Parties contractantes ou est lui aussi empêché de s'acquitter de cette tâche, le membre de la Cour internationale de Justice venant immédiatement après dans l'ordre de préséance qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations requises.

5. Le Président du tribunal doit être ressortissant d'un État avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques.

6. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord des principes du droit reconnus par les Parties contractantes et des principes généraux du droit international applicables en la matière. Il prend ses décisions à la majorité des voix et arrête son propre règlement. La sentence lie les deux Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les dépenses afférentes à son arbitre et à sa représentation à la procédure arbitrale. Les dépenses afférentes au Président ainsi que les autres dépenses sont en principe partagées à parts égales entre les Parties contractantes, à moins que celles-ci n'en conviennent autrement. Le tribunal arbitral peut néanmoins déterminer dans sa sentence qu'une proportion plus grande des dépenses seront à la charge de l'une des deux Parties contractantes, détermination qui lie les deux Parties contractantes.

Article 12. Disposition transitoire

Les Parties contractantes s'engagent à s'informer par la voie diplomatique, dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de signature du présent Accord, des secteurs dans lesquels il existe des réserves pour raison de nationalité conformément à leurs législations internes respectives.

Article 13. Dispositions finales

1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification respectifs et le demeurera pendant une période de dix ans, à l'expiration de laquelle il sera prorogé pour une durée indéfinie, à moins que l'une des Parties contractantes n'y mette fin conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. À l'expiration d'une période de dix ans, l'une quelconque des Parties contractantes pourra à tout moment mettre fin au présent Accord moyennant préavis de six mois par la voie diplomatique.

3. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord demeureront applicables pendant une période de dix ans aux investissements effectués avant la date du préavis de dénonciation.

Fait à San Salvador le 9 mai 1996 en double exemplaire en langue espagnole.

Pour le Gouvernement de la République argentine :

ANDRÉS CISNEROS

Pour le Gouvernement de la République d'El Salvador:

RAMÓN GONZÁLEZ GINER